

El nuevo extractivismo progresista

Eduardo Gudynas*

Acerca de cómo el neo-extractivismo progresista, pese a los discursos ambientalistas de los presidentes en Sudamérica, se está convirtiendo en motor fundamental del crecimiento económico y una contribución clave para combatir la pobreza.

A medida que avanza la gestión de los llamados gobiernos “progresistas” o de la “nueva izquierda” parecen aumentar los problemas y las críticas sobre su desempeño ambiental a nivel nacional, mientras que a nivel internacional se ofrecen mensajes de compromiso ecológico.

Esta situación se repite en muchos países. Los discursos internacionales del presidente Rafael Correa son muy apasionados, pero dentro de Ecuador acaba de echar por tierra la iniciativa de no explotar el petróleo en la Amazonia. Dando marcha atrás en los compromisos ambientales de su corriente política, volvió a criticar lo que llama como “ecologismo infantil”, para encaminarse hacia la explotación petrolera.

De manera similar, el presidente Lula da Silva lanzaba en la cumbre de Cambio Climático de Copenhague un fuerte discurso ambiental, mientras que dentro de Brasil promueve la “flexibilización” en los requisitos ambientales, financia emprendimientos de alto impacto (incluidos centrales térmicas a carbón) y persiste con sus planes de represas en la Amazonía. También en Copenhague, Hugo Chávez ofreció un discurso verde, mientras que tierras adentro, las organizaciones sociales especialmente denuncian que el estado de Zulia es una zona de “sacrificio ambiental”.

Bolivia no escapa a esa tendencia. Las invocaciones ambientalistas internacionales del gobierno de Evo Morales también contrastan con nuevas prospecciones petroleras o proyectos mineros, mientras que se alude a cambios normativos para que las demandas ambienta-

listas locales no se constituyan en “trabas” a la minería o petróleo.

Otros ejemplos se pueden presentar para Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay, de donde emerge una clara tendencia: los gobiernos progresistas vuelven a caer en estrategias extractivistas primarias. En el pasado la izquierda criticó duramente esos emprendimientos, concibiéndolos como ejemplos de “economías de enclave” repletas de atributos negativos. Pero hoy se los promueve y alienta, aunque esto debe ser encaminado bajo una mayor presencia estatal. El extractivismo es presentado ahora como un necesario camino para salir de la pobreza, y quienes lo critican estarían cuestionando esa posibilidad de progreso.

Bajo los gobiernos progresistas, en casi todos los casos hay un mayor papel estatal. En países como Bolivia, Ecuador y Venezuela se realizaron cambios sustanciales, tales como elevar las regalías y tributos, exigir la participación de las empresas estatales, nuevos controles sobre las inversiones, etc. Este es un hecho positivo, y alimenta una mayor captación de excedentes por parte del Estado.

Pero a la vez, esa apuesta al extractivismo refuerza una inserción internacional en los mercados globales como proveedores de materias primas y tomadores de los precios internacionales, y se depende de empresas transnacionales bajo esquemas de *joint ventures* o acuerdos de asociación. Más allá de los discursos anti-globalización, esta estrategia es funcional a esta globalización contemporánea.

El resultado es claro: las exportaciones provenientes de mineras y canteras de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, pasaron de unos 20 mil millones de dólares en 2004, a más de 46 mil millones en 2007 (según CEPAL). Se espera que Brasil duplique la producción de aluminio, y triplicará la de cobre al año 2013.

Los impactos sociales y ambientales se mantienen, y en algunos casos, se han acentuado. Se multiplican procesos de “desterritorialización”, donde las comunidades locales pierden el control de sus territorios bajo proyectos mineros o petroleros. Los conflictos y protestas sociales se multiplican, y en muchos casos son rechazadas y combatidas por estos gobiernos.

Abordar estas cuestiones se hace muy complejo cuando esos impactos son generados por empresas estatales o mixtas, como PDVSA en Venezuela, o Petrobrás tanto dentro de Brasil, como en otros países (especialmente Ecuador y Bolivia). Las empresas estatales quedan atrapadas en la misma lógica de la eficiencia y la rentabilidad, y por lo tanto evitan los aspectos sociales y ambientales. Pero su condición de “nacionales” las hace más difícil de criticar y evaluar.

En el mismo sentido, como este neo-extractivismo nutre muchos pro-

gramas sociales, obtienen con ello una fuerte legitimación política que hace todavía más difícil una evaluación desapasionada. En efecto, se alude una y otra vez que esta mayor captación estatal de excedentes es lo que permite financiar programas como Bolsa Familia en Brasil, Juanito Pinto en Bolivia o el Programa Familiar de Argentina. Esto genera una fuerte cobertura social y política.

Se llega así a una situación paradójica: si bien esos gobiernos podría decirse que se alejan de la izquierda clásica por su apoyo al extractivismo convencional, regresan a ella y logran justificarse como progresistas por esos programas sociales. Este vínculo se ejemplifica con las declaraciones de Evo Morales pocos meses atrás, rechazando las protestas de campesinos, indígenas y ambientalistas contra nuevas explotaciones petroleras. El presidente alertaba que si no se le dejaba explotar el petróleo de la Amazonia, no podría financiar sus programas sociales.

El efecto de este proceso es muy intenso en algunos países. En el caso de Brasil, los investigadores de la Comisión de la Pastoral de la Tierra muestran que si bien el gobierno de Lula ha abandonado las metas de reforma agraria, las ayudas sociales y financieras gubernamentales apaciguan las demandas de los movimientos del campo.

Los debates sobre los efectos sociales, ambientales y territoriales se vuelven más opacos. En algunos casos se los minimiza, en otros se los niegan y no faltan ejemplos donde se dice que éstos deben ser aceptados como “sacrificios” para un bien mayor a escala nacional. Las protestas son interpretadas como peleas por intereses económicos, confrontaciones sobre el ordenamiento territorial, o expresiones de ocultas agendas político partidarias.

Estas tendencias indican que estamos presenciando un cambio sustancial, donde el neo-extractivismo progresista pasa a ser aceptado como uno de los motores fundamentales del crecimiento económico y una contribución clave para combatir la pobreza a escala nacional. Se acepta que parte de ese crecimiento generará beneficios que se derramarán al resto de la sociedad (“goteo” o “chorreo”), pero a la vez se postula un papel de mayor protagonismo desde el Estado, tanto en captar más excedentes, como en orientar ese goteo. Los gobiernos progresistas deben dirigir ese proceso, e incluso deben incentivarlo para no “desperdiciar” las “riquezas naturales”, tal como dice el presidente Rafael Correa.

De esta manera, el neo-extractivismo de los actuales gobiernos progresistas es un nuevo ingrediente de una versión contemporánea del desarrollismo. Ciertamente no es un neoliberal encubierto, ya que se han dado cambios sustanciales, y algunos son muy importantes, como los programas de asistencia social. Pero tampoco puede decirse que son una forma de desarrollo alternativa, donde se generan transformaciones hacia una mayor equidad o calidad de vida. Encierran la potencialidad de controlar los sectores productivos bajo fines nacionales, pero también acecha el peligro de un autoritarismo desarrollista. Estas son las cuestiones que están comenzando a ser discutidas en varios países sudamericanos, donde los temas ambientales se convierten en el nuevo desafío y la nueva frontera para la izquierda.

* Investigador en CLAES
(Centro Latino Americano de Ecología Social)

